



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Luz Mery Suarez Jiménez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-
Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Radicación: 15001 3333 004 **2018 00201 00**

Procede el Despacho a emitir pronunciamiento frente a la solicitud de integración de litisconsorcio necesario del extremo pasivo, propuesta por la apoderada de la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (f. 81)

I. ANTECEDENTES.

Mediante proveído del 24 de enero de 2019 (f. 66), este Estrado Judicial admitió la demanda y ordenó la notificación de los sujetos procesales.

La notificación de la demanda tuvo lugar el 25 de enero de 2019, por lo que el término de traslado para contestar transcurrió desde el 26 de febrero de 2019 y hasta el 02 de abril de 2019 (f. 70).

La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro del término para contestar la demanda, presentó solicitud de vinculación de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá como litisconsorte necesario de la parte pasiva.(f. 81)

Sustentó su petición en virtud de lo establecido en la Ley 715 de 2001, por cuanto la administración del servicio educativo compete a cada una de las entidades territoriales, razón por la cual no existe ninguna intervención del Ministerio de Educación Nacional en el trámite que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la docente accionante.

Refirió que los trámites para el reconocimiento de la pretendida sanción moratoria se encontraban a cargo exclusivamente de la entidad territorial certificada, que es quien atiende las solicitudes, elabora y remite el proyecto de acto administrativo a la Fiduciaria La Previsora S.A. para su pago.

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 227 y 306 del CPACA, en cuanto al litisconsorcio necesario, se prevé lo siguiente:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. (...)”

Conforme a lo expuesto, el litisconsorcio necesario se configura cuando dentro del proceso hay pluralidad de sujetos en calidad demandante o demandado que están vinculados por una única “relación jurídico sustancial”; por esto es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, de tal forma que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste, es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos¹.

Así las cosas, la configuración de litis consortes ocurre siempre y cuando se advierta en el expediente que la cuestión litigiosa tiene implícita una relación jurídica material, única e indivisible, que su resultado tiene que ser unitario

¹ Consejo de Estado, auto del 19 de julio de 2010, Expediente No. 66001-23-31-000-2009-00073-01(38341) M.P: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

para todos los sujetos que conforman la parte correspondiente, y que de cada uno es imperativa su comparecencia al proceso, dado que sin ellos es imposible continuar con el trámite.

Descendiendo al caso sub examine se encuentra que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta.

De igual manera, el artículo 9 *ibídem* determinó que las prestaciones sociales pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las correspondientes entidades territoriales.

Competencia que se mantuvo con la expedición de la Ley 962 de 2005, que en su artículo 56 estableció que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre dicho Fondo, el cual, en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada, a la que se encuentre vinculado el docente.

El trámite para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 2005, de los cuales se puede concluir que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la entidad encargada de reconocer las prestaciones sociales que reclamen los docentes vinculados a ella, una vez sea radicada la solicitud través de las respectivas Secretarías de Educación, quienes son las competentes para elaborar el proyecto de acto administrativo y remitirlo a la entidad fiduciaria.

Bajo estos presupuestos, la actuación desplegada por la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, se enmarca en una mera formalidad ordenada en la Ley 91 de 1989, lo cual no obedece a una actuación propia o

autónoma del ente territorial, por lo tanto, no tiene injerencia alguna en el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, cuya función es exclusiva del FOMAG; así entonces, éste último sería el llamado a responder por la condena que se llegare a imponerse.

En efecto, no hay duda de que es a la fiduciaria representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989, por ende, se precisa que es al Fondo a quien le compete el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales.

Así las cosas, estima el Despacho que la petición de la parte demandada de vincular al ente territorial como litisconsorte necesario no procede, toda vez que no existe relación jurídico sustancial alguna entre tal entidad y las partes actora y accionada, la cual conlleve a que sea necesaria la comparecencia del ente territorial, en tanto además, no se perjudicará ni se beneficiará con la decisión que se dicte en la correspondiente fallo, referente al pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja.


RESUELVE

Primero: Tener por contestada la demanda por parte de la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Segundo. Negar la solicitud de vinculación de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá como litisconsorte necesario del extremo pasivo, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Reconocer personería a la abogada Ingrid Andrea González Torres, identificada con C.C. N° 52.733.455 y T.P. N° 152.068 del C. S. de la J., para actuar como apoderada judicial de la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los términos del poder especial visto a folio 83 del expediente.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
JUEZ

²AMRS

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

N ° 30 de hoy 28 de junio de 2019
a las 8:00 a.m.


DIANA CAROLINA QUINTERO RODRÍGUEZ
Secretaría

² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 28 de junio de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Diana Carolina Quintero Rodríguez

